

PROYECTO DE INTERVENCION

De: César Quiroga Soria, abogado, Asesor Legislativo Externo, Senador Durana.

A: José Miguel Durana Semir, Senador Región XV

Materia: Mecanismo de financiamiento FFAA

Estimado Senador:

El proyecto de ley tiende a lograr un equilibrio al establecer la facultad del Congreso Nacional para discutir y decidir sobre el financiamiento de capacidades estratégicas de nuestras Fuerzas Armadas, en forma clara y transparente, toda vez que hoy el Poder Legislativo se encuentra excluido de las decisiones que se adoptan al respecto.

De la misma forma, tiende a asegurar que el financiamiento de estas materias de defensa y que tienen relación con nuestra integridad como Estado, no dependan de las variaciones que tiene el precio internacional del cobre. Sin perjuicio de los efectos que dicho mecanismo tiene sobre los resultados financieros de CODELCO.

Para ello, se establecen mecanismos de transparencia, puesto que esta materia constituye una política de Estado, la cual, debe establecer instancias para que los controles civiles y democráticos sean efectivos, lo cual se alcanza con la participación en dichos sistemas de control, de la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional.

Un sistema eficiente de administración de los recursos necesarios para el financiamiento de las capacidades estratégicas del Estado es fundamental para una adecuada ejecución de tareas de nuestras Fuerzas Armadas y ello, es fundamental para Regiones como Arica y Parinacota, en la cual la presencia y funcionamiento de las Fuerzas Armadas se palpa con sentido de patriotismo en la garantía de nuestra soberanía e integridad territorial.

El sacrificio de todos quienes integran nuestras Fuerzas Armadas en las regiones fronterizas requiere contar con condiciones de infraestructura, recursos

materiales y recursos humanos eficientes que permitan el pleno cumplimiento de su labor y en esto, el respeto que le debemos a la función de soberanía de nuestras fuerzas armadas no admite improvisaciones.

Asimismo, las recientes tareas encomendadas a nuestras fuerzas armadas como componentes de una lucha eficaz contra el narcotráfico en nuestras fronteras, en especial, en la zona norte, reafirman aún más la necesidad de generar mecanismos eficientes.

En este sentido, el proyecto de ley elimina el piso mínimo para la realización de sus actividades generales exentas de control y una planificación, con horizontes no inferiores a los 8 años que permita desarrollar planes cuatrianuales de inversiones.

Se considera la creación del Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas el cual estará encargado de la programación y control de flujos financieros, a cargo del Banco Central, garantizándose la aplicación de normas que promuevan la eficiencia y seguridad.

Asimismo, se debe destacar la creación del Fondo de Contingencia Estratégico para enfrentar situaciones de crisis y el financiamiento de material bélico dañado o su compra, cuando sea necesaria la adquisición para la mantención o desarrollo de las capacidades estratégicas, también administrado, desde un punto de vista financiero por el Banco Central y bajo el control de la Contraloría General de la República.

Bajo esta normativa, el Congreso Nacional, de hoy y del futuro, deberá actuar con la máxima responsabilidad y madurez.

No debe entenderse ni interpretarse que esta normativa sea una forma de politizar nuestras Fuerzas Armadas, porque una acción en este sentido derivaría, necesariamente en un daño irreversible a la esencia de la seguridad de nuestro Estado.

Nuestra historia, reflejada en el sacrificio diario de cada uno de los centinelas de nuestras fronteras, se merecen ejercer sus funciones, amparados en sistemas administrativos transparentes e incuestionables, resguardándose, en todo momento, nuestro deber de reserva y cuidado.

Sugerencia: en virtud de los antecedentes expuestos, se sugiere la aprobación de este proyecto de ley.

Sin otro particular, le saludo con la mayor atención,

César Quiroga Soria

Asesor Legislativo Externo

PROYECTO DE INTERVENCION

De: César Quiroga Soria, abogado, Asesor Legislativo Externo, Senador Durana.

A: José Miguel Durana Semir, Senador Región XV

Materia: Proyecto de Ley que busca regular las aplicaciones tecnológicas en el ámbito del transporte remunerado de pasajeros

Estimado Senador:

Por intermedio de la presente, acompaño a Ud. proyecto de intervención, relativo a las aplicaciones tecnológicas en el ámbito de transporte remunerado de pasajeros.

El proyecto de ley que se debate intenta regular en nuestro país, una actividad económica que se ha masificado a nivel global, poniendo de relieve la necesidad de regular las actividades de servicios y de comercio que se realizan sobre la base de plataformas digitales, que son, en la práctica, de muy difícil fiscalización por los mecanismos públicos tradicionales.

Lamentablemente, este es un claro ejemplo que muchas veces, la dilación en la tramitación de un proyecto de ley que regula una actividad altamente tecnologizada se ve sobrepasado por la realidad, con consecuencias en otros sectores de nuestra economía.

De esta forma, el proyecto de ley se refiere a “vehículos de transporte menor de pasajeros”, en circunstancias que hoy, las plataformas digitales que permiten la prestación de este tipo de servicios. cuentan con vehículos de las más variadas características, condiciones o niveles de seguridad. En muchos casos deficiente.

Para ello, el proyecto plantea la creación de un registro de estas plataformas digitales, el cual, a su vez, debe contener la nómina de los choferes que prestarán el servicio y la vigencia de seguros de responsabilidad civil para vehículos y pasajeros así como de vida para el conductor.

Asimismo, se establece la necesidad de que los vehículos destinados a este tipo de servicio cuenten con requisitos técnicos, de seguridad y antigüedad determinados.

Se exige, por otra parte, que los choferes cuenten con licencia profesional y que los vehículos cuenten con distintivos con características que cumplan con las exigencias de los taxis básicos. Materias que, en todo caso, deberán ser meticulosamente reglamentadas.

Se establece la posibilidad de que los actuales taxis puedan adscribirse a dichas plataformas digitales, generándose un criterio de igualdad en el uso de dichas plataformas y los beneficios que esto conlleva.

La sanción que se establece para el chofer que no cumpla con estas exigencias es la de suspensión de licencia y el retiro del vehículo por parte de Carabineros, debiéndose, en todo caso regularse, a futuro los casos de reincidencia.

El Registro Nacional estará abierto por el lapso de tres meses, suspendiéndose la inscripción por el lapso de un año, al cabo del cual el Ministerio de Transportes decidirá por la mantención de la suspensión o por una nueva apertura del registro. Este tema, es preocupante, dado que puede generarse un monopolio que beneficie a los primeros inscritos e incentivar la proliferación de nuevas plataformas digitales que vulneren los criterios de orden y seguridad dispuestos por la misma norma.

Del tenor del proyecto, surgen algunas dudas que es necesario discutir:

- En qué situación quedan los actuales taxistas, quienes con mucho sacrificio y a través de la contratación de créditos han invertido en sus patentes de taxi y que hoy verán que, en la práctica, como la creación de un nuevo registro que permitirá que cientos e incluso miles de vehículos se incorporen al transporte público de pasajeros. La valoración económica de sus patentes de taxis, hoy constituye parte de su patrimonio y como tal se verá necesariamente mermado.

- Cual será el sistema de tributación para la presentación de este tipo de servicios. Se debe considerar esta materia en este proyecto de ley o bien en la reforma tributaria que contemple la regulación impositiva de las plataformas digitales.
- La suspensión de la licencia por seis meses de quienes sean sorprendidos sin estar registrados, junto con el retiro de sus vehículos aparece como una medida menor frente al impacto que tiene en el sector de los taxistas su funcionamiento irregular.
- De qué forma, como Estado, podemos garantizar que estas plataformas digitales, no obstante esta norma, no sigan proliferando al margen de la ley.

Sugerencia: Por estas consideraciones manifiesto mi voto en favor de legislar pero haciendo presente la necesidad de que el proyecto de ley sea enriquecido en su fase de indicaciones.

Sin otro particular, le saludo con la mayor atención,

César Quiroga Soria

Asesor Legislativo Externo

PROYECTO DE INTERVENCION

De: César Quiroga Soria, abogado, Asesor Legislativo Externo, Senador Durana.

A: José Miguel Durana Semir, Senador Región XV

Materia: Proyecto de Ley sobre Migración y Extranjería

Estimado Senador:

Este proyecto de ley, viene a llenar un vacío en nuestra legislación que se ha hecho más visible con la presión migratoria, a la cual se encuentra sometido nuestro país, en estos días, dado, por una parte, el drama que enfrenta el pueblo de Venezolano y que lleva a sus habitantes a prácticamente huir del hambre, la miseria y el riesgo a sus vidas en la cual los tiene sumidos el ilegal e inmoral gobierno de Nicolás Maduro y las condiciones de desarrollo, estabilidad y en consecuencia, de esperanza, que brinda nuestro país.

Esta visibilidad de los vacíos y deficiencias de nuestro sistema legislativo, nos lleva a concluir que la norma actualmente vigente, Decreto Ley No. 1094 de 1975, no es precisamente una disposición que se haga cargo de todo el fenómeno migratorio. No sólo por la antigüedad de una legislación de más de 40 años sino porque la realidad migratoria ha experimentado dramáticos cambios en los últimos años, lo cual se ve reflejado en lamentables hechos ocurridos en Europa y en EEUU especialmente.

Algunos perciben a esta situación como “de crisis” y sin entrar a ese calificativo, es necesario reconocerla como una realidad compleja y tal como ha hecho el gobierno del presidente Sebastián Piñera, considerar sus especiales características y a la vez, hacer el mayor esfuerzo en ordenar el fenómeno migratorio.

Lo anterior, adquiere urgencia si asumimos que este fenómeno migratorio es creciente, común a los países de la región que tienen mayor estabilidad económica como nuestro país y mientras subsistan las causas que lo motivan, tornándolo inevitable.

La proyección de arribo de miles de migrantes a Chile en los próximos meses, conforme lo reconoce el Ministerio del Interior, reafirma la necesidad de actuar con la mayor responsabilidad y madurez política.

Aquí no caben posturas ideológicas ni el afán de obtener réditos políticos. Los migrantes son, en su mayoría, personas vulnerables que requieren seguridad en las normas y orden en los procedimientos. En caso contrario, aumentaríamos su vulnerabilidad.

De acuerdo al Censo de 2017, un 66,7% de los inmigrantes que actualmente viven en Chile, llegaron al país entre 2010 y 2017.

Estas cifras crecen exponencialmente si consideramos que al 31 de Diciembre de 2018, la población migrante asciende a 1.251.225 personas, de los cuales un 23% corresponde a ciudadanos de nacionalidad venezolana, seguidos por los colectivos de nacionales haitianos y peruanos,

Las regiones del norte de Chile son, en términos porcentuales, las que reciben un mayor impacto de la migración. De esta forma los migrantes en Tarapacá significan un 13,7% de su población, un 11% de la población de Antofagasta y un 8,2% en la Región de Arica y Parinacota. Porcentajes que cada día aumentan dado el creciente fenómeno migratorio.

En el caso de la región de Arica y Parinacota, el fenómeno migratorio es especialmente sensible, puesto que a la elevada cifra de migrantes residentes en nuestra región, lo cual, en términos porcentuales implica tener la segunda concentración de personas de nacionalidad peruana y la tercera concentración a nivel nacional de personas de nacionalidad boliviana, debemos sumar el gran número de personas extranjeras que circulan por la región dirigiéndose al resto de Chile y por otra parte, la elevada población flotante que ingresa a Arica y Parinacota sin la intención de residir en ella.

En el caso del paso fronterizo de Chacalluta, las estadísticas demuestran que durante 2018, se registraron 6.719.885 controles fronterizos, de los cuales 3.503.646 personas ingresaron a Chile y 3.405.794 salieron de Chile, siendo el paso terrestre con mayor flujo del país, con todas las externalidades que ello implica.

Todo lo señalado anteriormente, nos debe llevar a considerar que la Región de Arica y Parinacota requiere el diseño de una política especial que permita contar con una infraestructura adecuada y mayores recursos destinados a seguridad, control de narcotráfico y sobre todo a generar las condiciones de atención humanitaria de este gran número de migrantes.

Los miles y hoy, cientos de miles de venezolanos que ingresan al territorio nacional, sobre todo en el último tiempo, permanecen en la ciudad de Arica, muchas veces, en condiciones precarias, procurando recursos, a través de la petición de limosna para poder seguir viaje al Sur de Chile.

La comunidad de Arica y sus organizaciones de ayuda los acoge, lo cual me enorgullece como ariqueño, pero se requiere un esfuerzo de mayores recursos públicos para ello. Más allá de la espontánea solidaridad requerimos ser responsables en las condiciones en las cuales permanecen estas personas.

De esta forma, la nueva legislación debiese considerar situaciones especiales como las que debe enfrentar Arica y Parinacota.

Por otra parte, el proyecto crea el concepto de *“habitante de zona fronteriza”*, determinando que los nacionales y residentes definitivos de Estados que sean fronterizos con Chile y que tengan domicilio en zonas limítrofes con la frontera nacional, tengan mayores facilidades para ingresar al país.

Esta figura legal, novedosa y acorde a la realidad de muchas localidades fronterizas, favorecerá la integración de comunidades, sobre todo en sectores de la Provincia de Parinacota, en la cual se realizan ferias y celebraciones religiosas en conjunto con localidades fronterizas bolivianas, generándose vínculos de integración de origen ancestral.

El problema que surge de esta nueva figura de *“habitante de zona fronteriza”* es si quien ingresa en dicha calidad, no se va del territorio nacional en los plazos establecidos en los Convenios que se celebren, los cuales no podrán ser superiores a los 7 días o bien, si este *“ciudadano fronterizo”* ingresa más allá de la zona fronteriza determinada.

En este último caso, la ley solo establece una multa de 5 Unidades Tributarias mensuales, lo cual aparece como insuficiente.

Por otra parte, es confuso que la norma señale que el ingreso, estadía y egreso hacia otro territorio chileno, distinto de la *“zona consignada”* para su estadía, se realice *“con sujeción a las normas generales”*, derivándose su regulación a reglamentos a que deben ser dictados en el futuro, lo cual tienen consecuencias en el ámbito de normas aduaneras, fitosanitarias y de delitos como el narcotráfico.

Por otra parte, en lo que se refiere a la *“Nacionalización”* de ciudadanos extranjeros, la norma se remite al Decreto No. 5142 de 1960, desaprovechándose, la oportunidad para su actualización, dado que, dicha norma, que tiene una antigüedad de más de 50 años.

En relación a la denominada *“nacionalización calificada”*, el proyecto suma a un periodo de tiempo mínimo de permanencia de dos años de residencia continuada, el cumplimiento de un requisito adicional determinado, entre ellos *“los parientes de chilenos por consanguineidad hasta el segundo grado inclusive y los adoptados por chilenos”*.

Esta figura establecida en la ley se contrapone al reconocimiento constitucional del jus sanguinis como fuente de nacionalidad que reconoce la nacionalidad chilena a hijos y nietos de chilenos y abre la posibilidad de nacionalización de forma muy amplia.

Sugerencia: En atención a los antecedentes expuestos, se sugiere aprobar el proyecto de ley en su etapa en general debiendo realizarse las modificaciones pertinentes en su etapa de indicaciones.

Sin otro particular, le saludo con la mayor atención,

César Quiroga Soria
Asesor Legislativo Externo

PROYECTO DE INTERVENCION

De: César Quiroga Soria, abogado, Asesor Legislativo Externo, Senador Durana.

A: José Miguel Durana Semir, Senador Región XV

Materia: Proyecto de Ley de protección a los animales

Estimado Senador:

Por intermedio de la presente, acompaño a Ud. proyecto de ley relativo al cambio de estatus jurídico de lo animales y su correspondiente protección.

PROYECTO DE INTERVENCION: LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES.

El proyecto de ley que hoy votamos en general contiene aspectos relevantes que merecen ser destacados y otros que me merecen algunos reparos.

Por una parte, el proyecto modifica el artículo 567 del Código Civil positivamente, puesto los animales, en términos genéricos, que dejan de ser, legalmente concebidos, como bienes muebles, semovientes y pasan a ser concebidos como “animales sintientes no humanos”, manteniendo su calidad de muebles a los efectos de celebrar actos y contratos.

De esta forma, la problemática integral que implica la protección de los animales, se enfoca desde una nueva perspectiva que no solo los ve como objeto de actos jurídicos o de comercio sino que los considera como seres vivientes que forman parte de una naturaleza esencial para el desarrollo del ser humano.

No obstante lo anterior, el proyecto establece en relación a los criaderos y centros de reproducción animal, la misma obligación que determina para los animales en rehabilitación o de exhibición, de forma tal, que señala, lo siguiente:

“cada especie animal un hábitat acorde con sus necesidades fisiológicas, en la cual sus funciones corporales y de comportamiento no sean alteradas ni sometidas a prueba de manera excesiva”

Para cumplir con este nuevo requerimiento de la ley, se debe garantizar un espacio en el cual, el animal, a partir de ahora, considerado como un ser sintiente, “pueda expresar un comportamiento normal”.

Un criterio interpretativo de esta norma, nos puede llevar a afectar la reproducción de animales con fines de alimentación o la producción de alimentos de origen animal, dañándose un sector productivo que genera miles de empleos y que constituye uno de los pilares de la soberanía alimentaria de nuestro país.

Bajo este criterio, las empresas avícolas y acuícolas de nuestro país se verán seriamente afectadas por este proyecto y debe cuidarse los mecanismos de protección de esta actividad, eliminando los efectos negativos de esta nueva norma sobre estas importantes áreas de actividad productiva.

Debemos ser responsables a momento de determinar la totalidad de los efectos que pueda generar esta norma y esto debe ser cuidadosamente tratado en la etapa de su discusión en particular, generándose, un equilibrio entre la protección animal y sectores muy sensibles de nuestra economía, los cuales tienen una participación económica trascendente en el desarrollo regional.

Sugerencia: Es por ello que manifiesto mi voto a favor en general a este proyecto de ley pero haciendo un llamado a eliminar o modificar todos los aspectos de este proyecto que afectan a la producción de alimentos de nuestro país y que implican miles de empleos para nuestras familias.

Sin otro particular, le saludo con la mayor atención,

César Quiroga Soria
Asesor Legislativo Externo

PROYECTO DE INTERVENCION

De: César Quiroga Soria, abogado, Asesor Legislativo Externo, Senador Durana.

A: José Miguel Durana Semir, Senador Región XV

Materia: Proyecto de intervención en materia laboral. Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas.

De mi consideración:

El informe de recomendaciones, emanado de la Comisión de Trabajo del Senado y que dice relación con la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, es el producto del consenso de los miembros de esta Comisión y ha sido aprobado, después de haber escuchado, sin excepción, a la totalidad de las partes involucradas.

La actual dependencia de los trabajadores que serán traspasados al nuevo Servicio es de naturaleza mixta.

Algunos trabajadores, tienen en la actualidad la calidad de públicos y otros se encuentran regidos por el Código del Trabajo,

Es por ello que la Comisión acordó recomendar que en los artículos 19 y 20 de la nueva disposición legal se deje expresamente establecido que el procedimiento determinado en dichos artículos sea aplicable, para determinar la responsabilidad de todos los trabajadores del nuevo Servicio.

La aplicación de estas normas procederá, sea que estos se encuentren regulados por el estatuto administrativo o sea que se encuentre regulados por el Código del Trabajo, sin perjuicio de las facultades que le corresponden a la Contraloría General de la República y del derecho de los trabajadores a recurrir a los Tribunales de Justicia.

Asimismo, y a los efectos de precautelar interpretaciones de la norma que afecten los derechos de los trabajadores, el informe sugiere que no se haga mención a un número máximo de trabajadores vinculados a áreas silvestres protegidas que deban ser traspasados de la CONAF al Servicio Nacional Forestal y posteriormente del SERNAFOR al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, recalcando la necesidad de que todos los trabajadores deben ser finalmente traspasados.

La Comisión acordó recomendar, especialmente, que dado algunos trabajadores tendrán un doble traspaso de entidades se precautele, en todo momento, la continuidad laboral y el respeto de sus derechos laborales. En este sentido, la Comisión recibió el compromiso del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente.

En esta misma línea de respeto irrestricto de los derechos laborales, el suscrito, conjuntamente con las senadoras Goic y Muñoz, y con el Senador Allamand hicimos presente la necesidad de consignar, expresamente, que los trabajadores del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas puedan constituir asociaciones de funcionarios, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 19.296 y en su caso, garantizar el derecho a la sindicalización.

Finalmente, los mismos Senadores Goic, Muñoz, Allamand y el suscrito, acordamos recomendar que las relaciones colectivas de los trabajadores deben encontrarse reguladas por las normas aplicables a las Asociaciones de Funcionarios, no siendo aplicables las disposiciones de la negociación colectiva, en el marco de lo dispuesto por el Libro IV del Código del Trabajo.

Sugerencia: Es por ello que manifiesto mi voto favorable al informe presentado por la Comisión del Trabajo e invito a mis colegas, como integrante de la misma a apoyar su contenido y recomendaciones.

En cuanto a la votación en particular del presente proyecto se sugiere:

Votar en contra de:

- La letra e) del artículo 5 del proyecto de ley para eliminar la frase: *“ejecutar y coordinar la implementación, así como velar y fiscalizar el cumplimiento de”*. Al respecto se estima que, si bien estos planes puedan ser elaborados por el Servicio, deberían ser ejecutados y fiscalizados por el Servicio Agrícola y Ganadero.
- Los incisos m); n); o) y p) del art. 5 del proyecto puesto que permiten la aplicación de los planes, fuera de las áreas protegidas.
- El artículo 29 y 30 relativo a *“sitios prioritarios”*, puesto que el proyecto exige para ello que se contemple sólo la participación de la comunidad y no se requiere informes técnicos que acrediten la sustentabilidad de esta potencial declaración.
- El artículo 31 referido a los *“ecosistemas amenazados”*, puesto que para su declaración como tal debería contemplar el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
- Los artículos 32 y 33 del proyecto, puesto que se refieren a los *“Ecosistemas degradados”* puesto que para la elaboración de planes, respecto de los mismos, no debe bastar, solamente con la consulta a la comunidad local sino que debe contarse asimismo, con criterios técnicos.

- La letra b) del artículo 44 del proyecto de ley, referido a la “*Prevención, control y erradicación de especies exóticas*”, puesto que la ejecución de debe ser de cargo de SAG y no del Servicio.

Sin otro particular, le saludo con la mayor atención,

César Quiroga Soria
Asesor Legislativo Externo